Pocos problemas como el de la violencia intrafamiliar son capaces de concitar la atención de la sociedad de forma tan preponderante. La razón es más que justificada, si consideramos la inaceptable afectación de derechos fundamentales de personas colocadas en situación de mayor vulnerabilidad, como son mujeres, niños y ancianos. Podría decirse que se trata no sólo de un lacerante problema social, sino de un tema ético que exige de una toma de postura que, sin ambigüedades ni cortapisas, asuma y afirme, en todos los ámbitos, la dignidad de todas las personas.

Dos mil seis fue un año en el que se logró la expedición de importantes instrumentos jurídicos para la atención del problema de la discriminación y la violencia, especialmente la dirigida hacia las mujeres. El 2 de agosto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo objeto es establecer el marco para que instituciones de todos los ámbitos de gobierno definan los mecanismos y programas encaminados al cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos y privados.

Es que no puede desconocerse que un factor funcional a la violencia hacia las mujeres ha sido la histórica situación desfavorable para acceder a espacios de dirección tanto públicos como privados, incluso su relegación dentro de la familia sólo a tareas vinculadas al cuidado de los hijos.

Por otra parte, en el mes de diciembre el Senado de la República aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, actualmente en espera de su promulgación y publicación por el Ejecutivo Federal. Esta Ley obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que desde una perspectiva de género, establezca condiciones legales para brindar seguridad a las mujeres en todo el territorio nacional, concerniendo de manera concurrente a los tres niveles de gobierno.